

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**

**DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA**

**MAGISTER EN SOCIOLOGIA**

**¿GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN?**

**JUSTICIA TRANSICIONAL Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN DEMOCRACIAS POST AUTORITARIAS (1970-2011)**

Autor

Mauricio Carrasco Núñez

Directoras de tesis

Oriana Bernasconi Ramírez

Julieta Palma Palma

**Santiago, octubre de 2022**

Índice

[I. MARCO TEÓRICO 3](#_Toc118727267)

[1. Definición y medición de conceptos centrales 4](#_Toc118727268)

[2. Estudios anteriores sobre justicia transicional y protección de los derechos humanos 16](#_Toc118727269)

[3. Teorías e hipótesis de la justicia transicional 24](#_Toc118727270)

[4. Bibliografía 29](#_Toc118727271)

# I. MARCO TEÓRICO

# 1. Definición y medición de conceptos centrales

## 1.1 Protección de los derechos humanos

En las ciencias sociales, generalmente se utiliza el concepto de protección (de las violaciones) de los derechos humanos para referirse a las prácticas que buscan evitar la ocurrencia de actos ejercidos por agentes del Estado que atentan contra los derechos de integridad física de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción (D. L. Cingranelli & Richards, 2010; Davenport & Armstrong, 2004; Poe et al., 1999; Richards et al., 2015). Las violaciones a la integridad física incluyen la desaparición forzada, el asesinato, las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, la tortura y otros tratos crueles, y la prisión política o arbitraria (Fariss & Dancy, 2017; Poe et al., 1999; Richards et al., 2015).

De acuerdo con lo establecido en el derecho internacional, las violaciones a los derechos de integridad física que constituyen violaciones de derechos humanos sólo pueden ser perpetradas, ordenadas o sancionadas por agentes del Estado, o por algún privado que opere con la anuencia de éste (*Estatuto de Roma de La Corte Penal Internacional*, 1998). Por tanto, el concepto de violación de derechos humanos describe materialmente los delitos cometidos por diferentes actores institucionales: los miembros del gobierno; los policías, guardias, personal de seguridad o cualquier otro tipo de agente encargado de velar por el orden público; los miembros de organizaciones militares o de organizaciones paramilitares; los miembros de las Fuerzas Armadas; los funcionarios de los servicios públicos; los agentes de los servicios de inteligencia; los miembros del sistema de justicia (donde se incluyen también las instituciones encargadas de cuidar a las personas que están bajo custodia del Estado); y/o los funcionarios de un Estado extranjero o de un Organismo Internacional (Gibney et al., 2020).

Es importante señalar que el concepto de violación de derechos humanos empleado por las ciencias sociales no distingue entre aquellas violaciones a los derechos de integridad física que se cometen con motivos políticos y aquellas que no se comenten con motivos políticos, puesto que la doctrina y el enfoque del derecho internacional establece que las vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas pueden ocurrir dentro o fuera de un contexto represivo (Davenport, 2007a; Haschke, 2018). La tortura ejercida por agentes del Estado, por ejemplo, es considerada una violación a los derechos humanos, aunque esta no se desarrolle en el marco de una política terrorista o de exterminio dirigida contra las personas que forman parte de la oposición política de la dictadura o del gobierno democrático de turno (McGregor, 2013). Por tanto, la motivación política es una variable independiente de la violencia estatal que conlleva violación a los derechos humanos, al igual que otras.

Pese a que las violaciones a los derechos humanos son una práctica extendida entre los gobiernos a nivel mundial, y que suele ser utilizada tanto en regímenes democráticos como autoritarios, son pocos los esfuerzos académicos que se han enfocado en medir de forma imparcial y sistemática los niveles de violencia estatal observados en cada año-país. Hasta ahora, la investigación cuantitativa sobre justicia transicional utiliza preferentemente tres indicadores de protección de los derechos humanos: el Índice de Derechos de Integridad Física de Cingranelli y Richards -CIRI- (D. Cingranelli et al., 2014), la Escala de Terror Político -PTS- (*Political Terror Scale*) del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU) (Gibney et al., 2020), y el Índice de Integridad Física Latente de Schnakenberg y Fariss (2014).

El índice de Derechos de Integridad Física de Cingranelli y Richards (CIRI) es un indicador estadístico que mide el nivel de respeto de los gobiernos por los derechos de integridad física en 202 países, entre los años 1981 y 2011. La unidad de análisis de CIRI es el "año-país" y su principal fuente de información son los informes de países sobre prácticas de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el informe anual de Amnistía Internacional. Su metodología se basa en la codificación separada de los casos de tortura, desaparición forzada, asesinatos y prisión política y su ponderación en escalas que van desde 0 a 2 puntos, donde 0 (cero) indica la comisión sistemática o generalizada de estos delitos, 1 indica la comisión ocasional y 2 indica la no ocurrencia. A partir de este registro, se construye un índice sumatorio que mide en una escala de ocho puntos el nivel de respeto por los derechos de integridad física, donde los puntajes más altos dan cuenta de un mayor nivel de protección (ver tabla 1).

**Tabla 1:** Indicadores de protección de la Integridad Física en CIRI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicadores** | **Detalle** | **Puntaje** |
| Ejecuciones | Variable que mide las ejecuciones políticas y otras ejecuciones extrajudiciales. Se codifica como 0 cuando esta práctica ha ocurrido con frecuencia en un año determinado; una puntuación de 1 indica que ocasionalmente se practicaron ejecuciones extrajudiciales; y una puntuación de 2 indica que tales asesinatos no ocurrieron en un año determinado. | 0-2 |
| Desapariciones | Variable que mide la desaparición forzada. Se codifica como un 0 cuando esta práctica ha ocurrido con frecuencia en un año determinado; una puntuación de 1 indica que ocasionalmente ocurrieron desapariciones; y una puntuación de 2 indica que las desapariciones no ocurrieron en un año determinado. | 0-2 |
| Tortura | Variable que mide la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se codificada como un 0 cuando esta práctica ocurrió con frecuencia en un año determinado; una puntuación de 1 indica que la tortura se practicó ocasionalmente; y una puntuación de 2 indica que la tortura no ocurrió en un año determinado. | 0-2 |
| Prisión política | Variable que mide el encarcelamiento político. Se codifica como un 0 cuando muchas personas fueron encarceladas debido a creencias religiosas, políticas o de otro tipo en un año determinado; una puntuación de 1 indica que algunas personas fueron encarceladas; y una puntuación de 2 indica que ninguna persona fue encarcelada por ninguna de las razones mencionadas en un año determinado. |  |
| Índice de protección de la integridad física de CIRI | Variable que mide el nivel de protección de los derechos de integridad física a través de la adición de los puntajes obtenidos en los indicadores de ejecuciones, desapariciones, tortura y prisión política. Tiene un rango que va de 0 a 8 puntos, donde 0 es el nivel más bajo de protección de los derechos de integridad física y 8 el más alto. | 0-8 |

La Escala de Terror Político del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Carolina del Norte (USA) es un indicador estadístico que mide el nivel de violencia estatal de 169 países, entre los años 1976 y 2019, a través del registro anual de violaciones a los derechos humanos de integridad física que hacen 3 organizaciones internacionales especializadas en la materia: Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Su metodología consiste en asignar duplas de investigadores especializados, que se encargan de codificar todas las violaciones al derecho humano a la integridad física que cometen los agentes estatales en cada país, y que están presentes en el contenido de los escritos publicados año a año por las organizaciones internacionales (Wood & Gibney, 2010). Luego, se analiza el volumen y el tipo de las violaciones a los derechos humanos (tortura, desaparición forzada, asesinatos políticos, etc.) que fueron codificadas en los informes y se construye un índice cualitativo que asigna un puntaje a cada país, en una escala de 5 niveles donde 1 es el nivel de terror político más bajo y 5 es el más alto (ver tabla 2). De esta manera, se construyen tres indicadores de violencia estatal (o terror político): uno para cada organización.

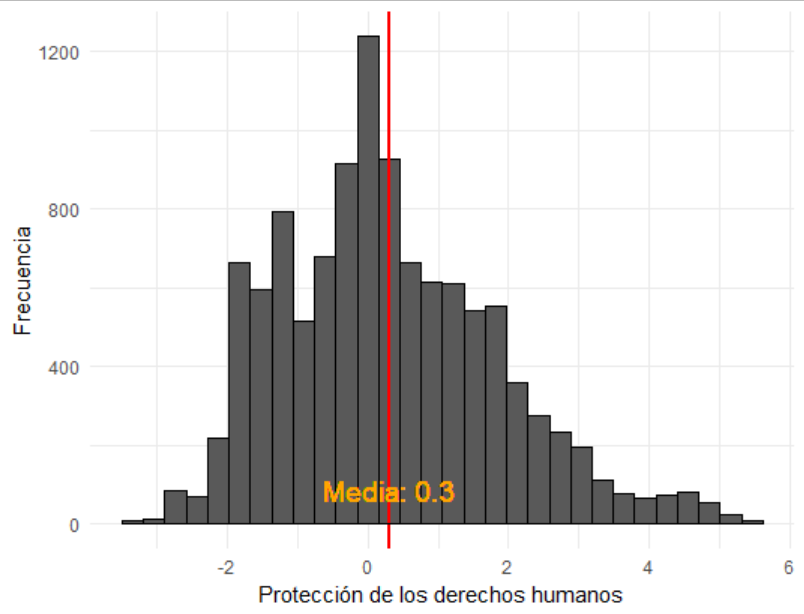
***Tabla 2:*** *Niveles de la Escala de Terror Político*

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Situación de los derechos humanos en los países** |
| 1 | El país tiene un estado de derecho seguro. Las personas no son encarceladas por sus ideas políticas, y la tortura o la aplicación de tratos crueles es rara o excepcional. Los asesinatos políticos son extremadamente raros. |
| 2 | Hay una cantidad limitada de prisión por actividad política no violenta. En ciertas ocasiones, algunas personas se ven afectadas por la violencia estatal, aunque la tortura y las palizas son excepcionales, y el asesinato político es muy raro o inexistente. |
| 3 | Hay un encarcelamiento político extenso en algunos sectores políticos o sociales, o hoy una historia reciente de tal encarcelamiento. La ejecución u otros asesinatos políticos son escasos, aunque la brutalidad policial o militar suele ser común. Las autoridades adoptan un discurso que acepta la detención ilimitada, con o sin juicio, por puntos de vista políticos. |
| 4 | Las violaciones de los derechos civiles y políticos se han ampliado a un número importante de personas. Asesinatos, desapariciones y/o torturas son parte de la vida cotidiana. A pesar de su carácter generalizado, la violencia estatal afecta mayoritariamente a aquellas personas que se interesan por la política y/o participan en movimientos que cuestionan el orden establecido. |
| 5 | Las violaciones a los derechos humanos descritas en el nivel 4 se extienden a toda la población o a un sector completo de ella. Las autoridades políticas de estos países no ponen límites al uso de medios ilegales por parte de agentes del Estado, porque algunas vulneraciones contribuyen a alcanzar sus objetivos personales o ideológicos. |

El Índice de Integridad Física Latente de Schnakenberg y Fariss es un indicador robusto de protección de los derechos humanos, que utiliza diferentes fuentes de información estadística y que cubre un total de 198 países, entre los años 1946 y 2019. El puntaje del Índice de Protección de Integridad Física Latente es calculado a través de un modelo de teoría dinámica de respuesta al ítem ordinal que reduce el sesgo de medición que generan los cambios en el nivel de información disponible y en los estándares de derechos humanos a lo largo del tiempo (Clark & Sikkink, 2013, pp. 175–177; Fariss, 2014).

El cálculo del puntaje consiste en crear *m* conjuntos de datos utilizando diferentes dibujos de la distribución posterior de la variable latente para luego combinarlas a través de la fórmula de Rubin, donde la estimación puntual para cada parámetro es la media de las estimaciones *m*, y el error estándar es donde *S*2*k* es el error estándar del conjunto de datos *k*, y *σ*2 es la varianza en los coeficientes de regresión entre conjuntos de datos. En palabras, el error estándar de *β* es el error estándar promedio de cada modelo, más la varianza en los coeficientes de regresión multiplicada por un factor de corrección para cada *m*. Esta estandarización hace que el puntaje estimado de protección de los derechos humanos se distribuya en una escala de intervalo similar a la del puntaje Z de la curva normal, que va desde el nivel más bajo de protección hasta el más alto (ver figura 1).

***Figura 1.*** *Distribución de los puntajes del índice de Integridad Física Latente*



La literatura producida por los estudios macro cuantitativos que utilizan estos índices nacionales de represión política muestra que la protección de los derechos humanos está fuertemente relacionada con el nivel de conflictividad de los países, el tipo de régimen político y otras variables demográficas y económicas que definen la estructura de la población (Keith, 2012; Rivera, 2012). Según estos estudios, la violencia estatal aumenta en aquellos países que atraviesan por conflictos armados (guerras civiles o guerras internacionales) (Davenport, 2007b) o que enfrentan periodos de revueltas o rebeliones sociales que conducen al uso de la acción represiva de las fuerzas de orden y seguridad frente al aumento de manifestaciones violentas (Rivera Celestino, 2010). Los estudios también relacionan la disminución de los niveles de violencia estatal con el aumento en los niveles de democracia, medidos a través la transformación en las prácticas y arreglos institucionales que regulan el ejercicio de poder y establecen un sistema vertical de rendición de cuentas (Armstrong, 2009; Bueno De Mesquita et al., 2005; Davenport, 2007a). Además, en cuanto a las variables económicas y demográficas, la literatura muestra que los niveles de violencia estatal dependen del tamaño y crecimiento de la población, y del nivel de riqueza (PIB), de desigualdad y crecimiento económico de los países, ya que la probabilidad de que exista represión es mayor cuando los gobernantes y las fuerzas de orden y seguridad se enfrentan a poblaciones grandes y/o empobrecidas (Keith, 2012).

## 1.2 Justicia Transicional

El concepto de justicia transicional refiere a todas aquellas medidas implementadas por los gobiernos para enfrentar las consecuencias jurídicas, sociales y políticas que dejan los pasados violentos y/o autoritarios, marcados por el ejercicio de violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos (Teitel, 2003). Las medidas de justicia transicional son implementadas generalmente en contextos de transición política (es decir, durante o después del término de una guerra civil o de una dictadura, y en medio de la reconstrucción democrática de un Estado) con el doble objetivo de a) entregar verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familiares, y b) garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos en el futuro. Entre las medidas de justicia transicional se incluyen los juicios penales por violaciones a los derechos humanos, las amnistías, las comisiones de verdad, las políticas de memorialización, los programas de reparación integral para las víctimas y sus familiares, la revisión de antecedentes, las purgas y las reformas institucionales. Sin embargo, las más estudiadas por los académicos han sido los juicios y las comisiones de verdad.

### 1.2.a Enjuiciamientos

En el contexto de una transición democrática, el enjuiciamiento es entendido como un proceso penal —que incluye juicios preliminares, audiencias de juicio y veredictos y sentencias— contra agentes estatales perpetradores de violaciones de derechos humanos que ocurrieron antes de la transición política al régimen democrático (Sikkink, 2011). Generalmente, los académicos examinan bajo este concepto los casos judiciales que operan en los tribunales nacionales de un país o en la Corte Penal Internacional u otros tribunales regionales o internacionales (H. Kim & Sikkink, 2010; Sikkink & Kim, 2013). Sin embargo, estudios recientes sugieren que es conveniente analizar los efectos de esta variable incluyendo sólo los casos nacionales de responsabilidad penal individual, ya que éstos dan cuenta del nivel de compromiso estatal que se tiene con los derechos humanos (Dancy et al., 2019).

En la investigación cuantitativa sobre los efectos de la justicia transicional se han utilizado dos tipos de indicadores para medir el uso de los enjuiciamientos penales por violaciones de derechos humanos en los países en transición. El primer indicador fue construido por Kim y Sikkink en su estudio sobre los efectos de los juicios por violaciones de derechos humanos en las democracias post autoritarias (H. Kim & Sikkink, 2010). Este índice mide de forma dicotómica la apertura de al menos un caso judicial nacional e internacional en cada año-país, según la información proporcionada por el Registro de Eventos Mundiales de Keesing. A partir de esta medición, Kim y Sikkink construyen otro indicador que suma los años de transición por país en los que se celebraron enjuiciamiento de violadores de derechos humanos para dar cuenta de las prácticas continuas de rendición de cuentas por los abusos del pasado. El segundo indicador sobre enjuiciamientos por violaciones de derechos humanos fue construido por los académicos del Proyecto Colaborativo de Investigación en Justicia Transicional (Transitional Justice Research Collaborative). Este indicador captura el número de enjuiciamientos y sentencia condenatorias que dictan los tribunales nacionales de los países en transición, según lo informado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La información obtenida a través de dicha fuente es complementada con el Registro de Eventos Mundiales de Keesing para construir cuantitativamente el número de enjuiciamientos y sentencias condenatorias que ocurren año a año en los países en transición. A partir de este número, los académicos construyen indicadores que dan cuenta del nivel de rendición de cuentas que han alcanzado los países en transición, sumando el número de eventos registrados por las variables originales (ver Dancy et al., 2019; Lessa et al., 2014).

Según la literatura científica existen cuatro factores clave relacionados con el uso o aumento de enjuiciamientos penales por violaciones de derechos humanos en los países en transición: la demanda de la sociedad civil, la ausencia de jugadores con veto, el liderazgo judicial nacional y la presión internacional (Lessa et al., 2014). El primer factor, se basa en la evidencia acumulada por los estudios de caso que demuestran que los movimientos locales de derechos humanos, compuestos por organizaciones de la sociedad civil que surgieron durante el régimen autoritario y que continúan movilizándose por la justicia durante y después de la transición democrática, tienen los recursos políticos y organizativos para demandar eficazmente el enjuiciamiento de los criminales de lesa humanidad, y combatir la impunidad que genera el uso de amnistías. El segundo factor, se basa en la importancia que tiene la ausencia o presencia de jugadores con veto en los procesos de justicia transicional. Es decir, de actores poderosos que podrían oponerse a la rendición de cuentas o la investigación de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. En este sentido, la presencia de jugadores con veto suele estar asociada con altos niveles de impunidad, mientras que la ausencia de ellos facilita los procesos de enjuiciamiento. El tercer factor hace referencia al rol que desempeñan los abogados particulares, los jueces y otros actores locales del sistema judicial en las democracias post autoritarias. Un poder judicial independiente que conozca los principios democráticos del derecho a reparación y las normas internacionales de derechos humanos puede estar dispuesto a desafiar la impunidad e incentivar la rendición de cuentas, tanto en el corto como en el largo plazo. El cuarto factor refiere a la presión que ejerce la comunidad internacional a través de las obligaciones legales incorporadas en tratados y fallos de tribunales regionales. Los acuerdos internacionales de derechos humano que son jurídicamente vinculantes establecen expresamente el deber de los Estados de enjuiciar a los funcionarios públicos que cometan o hayan cometido delitos tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma.

### 1.2.b Amnistías

En la presente tesis, utilizaremos el término “amnistía” para hacer referencia a las disposiciones legislativas, constitucionales o ejecutivas vigentes que otorgan inmunidad judicial por violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales durante el régimen autoritario anterior (Dancy et al., 2019). Generalmente, las amnistías son políticas gubernamentales propuestas por presidentes, dictadores o legisladores y, por lo general, solo confirmadas o impugnadas por procesos judiciales, que buscan garantizar la estabilidad política de los procesos de transición (Snyder & Vinjamuri, 2003).

En los estudios macro cuantitativos de justicia transicional, el uso de amnistías ha sido medido de dos maneras: a) de manera dicotómica, para indicar la vigencia de una ley de amnistía durante uno o más años de transición (Olsen, Payne, & Reiter, 2010), y b) de manera numérica, para indicar el número de leyes de amnistías acumuladas durante los procesos de transición (Dancy et al., 2019).

Según algunos autores que promueven el uso de amnistías en los procesos de transición, el principal factor asociado a la mantención o adopción de estas leyes, es la necesidad que tienen los gobiernos emergentes de garantizar la estabilidad política y el estado de derecho, evitando cualquier tipo de insurrección por parte de los potenciales agentes saboteadores (Snyder & Vinjamuri, 2003; Vinjamuri & Snyder, 2015). Sin embargo, los estudios de justicia transicional que han puesto a prueba esta hipótesis no han encontrado evidencia robusta que respalde las propuestas de estos académicos (Dancy et al., 2019; Olsen, Payne, & Reiter, 2010).

### 1.2.c Comisiones de verdad

Por su parte, las comisiones de la verdad refieren a organismos temporales y oficialmente sancionados, que se constituyen con el mandato de investigar períodos específicos de abusos estatales ocurridos en el pasado (H. J. Kim, 2019; Olsen, Payne, Reiter, et al., 2010). Su finalidad explícita es establecer la verdad sobre los abusos pasados y evitar que se repitan en el futuro (Hayner, 2008). Por lo mismo, una Comisión de Verdad puede: a) proporcionar un reconocimiento oficial de las violaciones de derechos humanos del pasado, reescribiendo la historia; b) centrarse en los factores institucionales y estructurales que permitieron tales abusos; c) hacer recomendaciones para reformas legales e institucionales; d) proporcionar información que sea útil para los enjuiciamientos posteriores y la investigación de antecedentes entre los miembros abusivos de las fuerzas de orden y seguridad; y e) crear un listado oficial de víctimas que permita la realización de políticas de memorialización y de reparación integral (Hayner, 2008; Rivas, 2016).

Las investigaciones sobre justicia transicional afirman que el cumplimiento de los objetivos de prevención de violaciones a los derechos humanos de una comisión de verdad depende, en gran medida, de la calidad de las mismas. Es decir, de si la comisión en cuestión emite o no un informe público, y de si hace o no recomendaciones de reformas o entrega información importante para la realización de juicios penales por abusos del pasado (Bakiner, 2014; Dancy & Thoms, 2022). Por tanto, es conveniente distinguir cada una de estas operaciones en indicadores diferentes que permitan monitorear las prácticas asociadas a las comisiones de verdad y medir su contribución a la no repetición.

En la literatura científica, el uso de comisiones de verdad ha sido medido de dos maneras. La primera medición consigna el uso de estos mecanismos a través de una variable dicotómica que da cuenta de la experiencia o inexperiencia de los países a lo largo de los procesos de transición (H. J. Kim, 2019). La segunda medición consigna el uso de una o más comisiones de verdad a lo largo del tiempo a través de indicadores números que dan cuenta de la cantidad y la calidad de los eventos asociados a este mecanismo. La medición dicotómica y numérica de las comisiones de verdad está incluida en las variables disponibles en la base de datos del Proyecto Colaborativo de Investigación en Justicia Transicional. En este proyecto la información académica sobre el uso de comisiones de verdad proviene de tres fuentes distintas: los datos de Priscilla Hayner disponible en su libro en *Unspeakable Truths* (2.ª edición), la base de datos de Comisiones de Verdad de Dancy et al. (2010) y las comisiones de la verdad enumeradas en el sitio web del Instituto de la Paz de EE. UU (Dancy et al., 2014). A partir de esta información, los académicos realizan investigaciones adicionales en cada caso para construir indicadores adicionales que dan cuenta de la calidad de las comisiones de verdad realizadas en los países, como la publicación de informes y la formulación de recomendaciones de reformas o enjuiciamientos (Dancy & Thoms, 2022).

Según un estudio reciente de Hojoon Kim (2019), la adopción de una comisión de verdad por parte de los gobiernos democráticos post autoritarios depende significativamente de dos factores clave: las redes transnacionales (locales y extranjeras) de promoción de las comisiones de verdad, y la difusión de la experiencia de una comisión de verdad entre los países vecinos. La existencia de organizaciones y movimientos de derechos humanos activos y fuertes es un factor significativo que afecta la decisión de un estado de establecer una comisión de verdad. El efecto que puede producir un movimiento nacional de derechos humanos sobre la adopción gubernamental de una comisión de verdad es aún mayor si su demanda de verdad es apoyada por organismos del sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales de carácter transnacional. Además, el estudio muestra que los gobiernos de los países con democracias post autoritarias son más propensos a adoptar una comisión de verdad si uno de sus países vecinos ya lo ha hecho. Este efecto de difusión, se produce al compartir experiencias de justicia transicional entre países con características culturales, geográficas y políticas similares (por ejemplo, entre las democracias post autoritarias instauradas en América Latina luego del periodo de dictaduras de seguridad nacional de los años 1970 y 1980).

Además de los dos factores clave mencionados, el estudio de Hoojun Kim (2019) muestra que la adopción de una comisión de verdad también está relacionada con el nivel de democracia y desarrollo económico alcanzado por los países en transición. Los países con un alto nivel de democracia, medidos por la puntuación polity IV, parecen ser más propensos a establecer comisiones de la verdad que los países con bajos niveles de democracia o que enfrentan periodos autoritarios. Asimismo, los datos de estudio muestran que los gobiernos post autoritarios de los países con recursos económicos crecientes son más propensos a adoptar comisiones de verdad que los que atraviesan por periodos de crisis o bajo crecimiento económico, ya que pueden dedicar más esfuerzos políticos a las cuestiones relacionadas con las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado.

# 2. Estudios anteriores sobre justicia transicional y protección de los derechos humanos

Durante los últimos 15 años, se han desarrollado cuatro grandes estudios cuantitativos que analizan estadísticamente la relación entre justicia transicional y protección de los derechos humanos en las democracias post autoritarias.

El primer estudio fue realizado por Hunjoon Kim y Kathryn Sikkink (2010) a fines de la década de los 2000. Este estudios se enfocó en analizar la relación entre los juicios por violaciones de derechos humanos (nacionales y extranjeros) y el nivel de protección a los derechos de integridad física, considerando también el uso de comisiones de verdad como variable de control (H. Kim & Sikkink, 2010).

La muestra utilizada en el estudio de Kim y Sikkink (2010) considera un total de 93 países en transición, que pasaron desde autocracias o guerras civiles hacia regímenes democráticos o semidemocráticos, o que fueron creados después de la disolución de un estado autocrático, entre los años 1980 y 2004. El nivel de respeto a los derechos humanos es analizado mediante el índice de derechos de integridad física de Cingranelli-Richards (CIRI), mientras que los juicios por violaciones de derechos humanos son operacionalizados en dos variables diferentes: una variable dicotómica que indica si un país tuvo un enjuiciamiento nacional o extranjero en algún momento después de la transición, y una variable numérica que cuenta los años de enjuiciamientos acumulados por país. Las comisiones de verdad, por su parte, son medidas a través de una variable dicotómica que refleja experiencia anterior y posterior al uso de este mecanismo a través de los años de transición, considerando el hecho de que existen países que descartan una política institucional para establecer una verdad histórica sobre los abusos del pasado. Para el resto de las variables de control, el estudio incorpora indicadores ampliamente aceptados de democracia, guerras internacionales, guerras civiles, ratificación de tratados, posición económica del país dentro de la región, crecimiento económico, tamaño de la población y crecimiento de la población.

Los resultados del estudio Kim y Sikkink (2010) proporcionan un panorama positivo sobre la relación entre enjuiciamientos penales y protección de los derechos humanos en los países en transición. En concreto, los resultados muestran que los países con enjuiciamientos tienen mejores niveles de protección de los derechos humanos que los países sin enjuiciamientos, y que los países que han experimentado más enjuiciamientos a lo largo del tiempo tienen una mayor protección de los derechos humanos que los países que tuvieron menos años de enjuiciamientos. Además, los resultados muestran que la experiencia de una comisión de verdad también tiene una relación positiva con la protección de los derechos humanos. Esto quiere decir, que los países que implementaron comisiones de verdad tuvieron menores niveles de represión durante el periodo de transición que los países que no hicieron uso de este mecanismo.

Kim y Sikkink explican sus hallazgos apoyándose en la teoría constructivista de la disuasión. Esta teoría plantea que los enjuiciamientos y las comisiones de verdad contribuyen a la protección de los derechos humanos en las democracias post autoritarias porque aumentan los costos penales y simbólicos asociados al uso de la represión estatal (Sikkink, 2011; Sikkink & Kim, 2013). Ambos mecanismos comunican a los agentes del Estado que, en caso de cometer violaciones de derechos humanos, serán perseguidos por los tribunales y serán desacreditados públicamente por los organismos encargados de investigar dichos abusos.

El segundo estudio macro cuantitativo sobre justicia transicional y protección de los derechos humanos fue publicado por Tricia Olsen, Leigh Payne y Andrew Reiter (2010). Uno de los objetivos principales de este estudio es analizar la relación entre el uso de juicios, amnistías y comisiones de verdad, y los niveles de protección de los derechos de integridad física en los países en transición (Olsen, Payne, & Reiter, 2010).

Olsen, Payne y Reiter utilizan una muestra que incluye 91 transiciones políticas del autoritarismo a la democracia, ocurridas en 74 países del mundo entre los años 1970 y 2004. La medición del respeto o protección de los derechos humanos se realiza a través de dos indicadores diferentes: el índice de derechos de integridad física de Cingranelli-Richards (CIRI) y la escala de terror político (PTS) del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Carolina de Norte (USA). El uso de amnistías, comisiones de verdad y enjuiciamientos, se mide a través de variables dicotómicas que dan cuenta del uso o vigencia de cada uno de estos mecanismos durante los años de transición y también de manera acumulada a lo largo del tiempo. Como variables de control se incluye el PIB, la región, y el nivel de democracia de los países.

Los hallazgos obtenidos por Olsen, Payne y Reiter difieren significativamente de los resultados del estudio de Kim y Sikkink (2010). El estudio de Olsen y sus colegas muestra que, en general, la adopción de los mecanismos de justicia transicional se relaciona positivamente con la protección de los derechos humanos, pero ninguno de estos mecanismos por sí sólo logra prevenir el uso de la violencia estatal (Olsen, Payne, & Reiter, 2010). Ni los juicios, ni las amnistías tienen una asociación positiva con el nivel de respeto a los derechos humanos, y las comisiones de verdad parecen estar asociadas con un aumento de la represión estatal. Sin embargo, dos combinaciones de mecanismos de justicia transicional si muestran una relación positiva y estadísticamente fuerte con el nivel de respeto a los derechos humanos en los países en transición: (1) la combinación de juicios y amnistías, y (2) la combinación de juicios, amnistías y comisiones de verdad.

Olsen, Payne y Reiter explican los hallazgos de su investigación apoyándose en la teoría del equilibrio de la justicia transicional. Esta teoría, plantea que la combinación de juicios y amnistías genera un equilibrio que contribuye a los objetivos de la democracia y los derechos humanos, ya que permite satisfacer una parte importante de la demanda por justicia levantada por las víctimas y sus familiares, sin activar a los potenciales saboteadores del proceso de transición que podrían perpetrar un nuevo golpe de estado. Bajo este supuesto, Olsen y sus colegas plantear que la estabilidad a corto plazo que brindan las amnistías no impide el beneficio a largo plazo de la rendición de cuentas a través del enjuiciamiento de criminales de lesa humanidad. Es decir, la secuencia de la amnistía y los juicios a lo largo del tiempo sería la fórmula más razonables de garantizar el respeto de los derechos humanos en los regímenes post autoritarios, sin poner en riesgo la democracia (Olsen, Payne, & Reiter, 2010). En la misma línea, los autores plantean que, por si solas, las comisiones de verdad impactan negativamente en la protección de los derechos humanos porque no logran promover la rendición de cuentas ni generar estabilidad política en el proceso de transición. Pero si las comisiones de verdad se combinan con enjuiciamientos y amnistías mejoraran los niveles de protección de los derechos humanos en el corto y largo plazo, ya que contribuyen a reforzar el equilibrio de la justicia transicional (Olsen, Payne, Reiter, et al., 2010).

El tercer estudio sobre justicia transicional y protección de los derechos humanos, fue realizado recientemente por Geoff Dancy, Bridget Marchesi, Tricia Olsen, Leigh Payne, Andrew Reiter y Kathryn Sikkink (2019). Este estudio analiza la relación entre juicios y amnistías y la protección de los derechos de integridad física y las libertades civiles y políticas en los países con democracias post autoritarias (Dancy et al., 2019).

La muestra utilizada por Dancy y sus colegas selecciona dos tipos de casos: los casos de estados democráticos recién formados y los casos de estados que pasan de la autocracia a regímenes semi o totalmente democráticos. En total, la base de datos contiene 111 transiciones democráticas ocurridas en 89 países, entre los años 1970 y 2015. El nivel de respeto a los derechos de humanos es medido a través del índice de derechos de integridad física Cingranelli-Richards (CIRI), y el nivel de protección de las libertades civiles y políticas es medido través de índice de derechos de empoderamiento de la misma base de datos. Los enjuiciamientos penales y las amnistías son medidas a través de variables numéricas que indican la cantidad de mecanismos de justicia transicional vigentes para cada año de transición y de manera acumulada. Además, se incorporan una variable que cuenta los veredictos de culpabilidad en el año en que la sentencia fue emitida por primera vez por un tribunal. Estas sentencias son acumuladas en el tiempo de transición de la misma manera que los juicios y las amnistías vigentes. En cuanto a las variables de control, el estudio de Dancy y sus colegas incorpora indicadores de quiebre democrático, independencia del poder judicial, guerra civil, años de transición, PIB per cápita, tamaño de la población, y nivel de protección de los derechos humanos antes de la transición.

A diferencia de los resultados obtenidos por Olsen, Payne y Reiter (2010), la evidencia presentada por Dancy y sus colegas, muestra que los enjuiciamientos y los veredictos de culpabilidad están asociados con un aumento significativo en los niveles de protección de los derechos de integridad física, mientras que las amnistías se asocian con una menor violación de las libertades civiles y políticas. Sin embargo, la combinación de ambos mecanismos no genera efectos positivos en los derechos analizados. Es decir, la combinación de juicios y amnistías no mejora los niveles de protección de derechos de integridad física, ni el respeto de las libertades civiles y políticas en las democracias post autoritarias. Esto demuestra que los enjuiciamientos y las amnistías, por si solas, contribuyen a distintos objetivos políticos del proceso de transición, aunque estos no sean necesariamente coherentes ni compatibles entre si (Dancy et al., 2019). Según Dancy y sus colegas, los hallazgos de su investigación pueden usarse para informar un nuevo enfoque de la justicia transicional, uno basado no en la deliberación democrática o el legalismo formal, sino en lo que algunos teóricos denominan "agonismo" (Mouffe, 2014). Tal enfoque reconocería la naturaleza irreductiblemente impugnada de la acción política y legal realizada en nombre de la justicia transicional, al tiempo que vería en esa impugnación la fuente del pluralismo y el cambio productivo.

El cuarto y último estudio sobre justicia transicional y protección de los derechos humanos en las democracias post autoritarias, fue realizado en 2021 por Geoff Dancy y Oscar Thoms (2022). Este estudio analiza la relación entre el uso de comisiones de verdad y el fortalecimiento de las instituciones y prácticas democráticas de los países en transición, entre las que se incluye el respeto por los derechos de integridad física (Dancy & Thoms, 2022).

Dancy y Thoms, utilizan una muestra que incluye tres tipos de casos: 1) países que transitaron desde dictaduras o guerras civiles hacia regímenes democráticos o semidemocráticos, 2) países cuya institucionalidad democrática fue creada o reconstruida luego de la disolución de un estado autocrático, y 3) países democráticos que experimentaron guerras civiles o conflictos armados internos. En total, la muestra incluye 92 países que experimentaron transiciones o guerras civiles entre los años 1970 y 2015. El nivel de respeto a los derechos humanos es medido a través del indicador de integridad física latente de Schnakenberg y Fariss (2014). El uso de comisiones de verdad es medido a través de un conjunto de indicadores que dan cuenta de sus operaciones en los procesos de transición, y de su nivel de éxito o fracaso. El primer indicador da cuenta de la realización de una comisión de verdad, incluido aquellas que no culminaron su trabajo o que se disolvieron sin producir resultados observables. El segundo indicador da cuenta de la existencia o inexistencia de un informe final emitido por una comisión de verdad. El tercero da cuenta de la publicación oficial de dicho informe (de manera impresa o digital). Y el cuarto indicador señala si el informe publicado incluye o no recomendaciones para reformas institucionales o enjuiciamiento de violadores de derechos humanos (ambas medidas de forma separada). En cuanto a las variables de control, el estudio incorpora el PIB per cápita, el tamaño de la población y la presencia o ausencia de conflictos armados en los países.

A diferencia de lo planteado por Olsen, Payne y Reiter (2010), los resultados del estudio de Dancy y Thoms (2022) muestran la existencia de una fuerte asociación entre el uso de comisiones de verdad y la mejora en la protección de los derechos humanos. Incluso, los resultados muestran que la situación de los derechos humanos mejora aún más si las comisiones de verdad hacen públicos sus informes y si recomiendan el enjuiciamiento de criminales de lesa humanidad. Este hallazgo respalda los resultados de otros estudios de justicia transicional que, desde un enfoque constructivista (H. Kim & Sikkink, 2010), sostienen que el uso combinado de juicios y comisiones de verdad genera un efecto disuasorio que contribuye significativamente a la no repetición, al aumentar los costos penales y simbólicos de la represión estatal (Dancy & Thoms, 2022).

Al analizar los hallazgos producidos por los cuatro estudios citados anteriormente, se pueden observar importantes similitudes y diferencias en cuanto a la contribución que hacen -de forma individual o combinada- los mecanismos de justicia transicional a la protección de los derechos humanos en las democracias post autoritarias.

Las principales similitudes se dan a nivel individual y están relacionadas con el uso de los juicios por violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. Tanto el estudio de Kim y Sikkink (2010) como el estudio de Dancy y sus colegas (2019), muestran una relación positiva entre el uso de enjuiciamientos y los niveles de protección de los derechos humanos. Este resultado es similar pese a que ambos estudios usan diferentes medidas para dar cuenta de las covariables de interés. Mientras Kim y Sikkink (2010) utilizan variables dicotómicas, Dancy y sus colegas (2019) utilizan variables numéricas que dan cuenta de la cantidad de juicios celebrados por año e incorporan al análisis los casos con sentencias condenatorias para los criminales de lesa humanidad. En ambos casos, los resultados aportan evidencia sólida que apoya los argumentos esgrimidos por los académicos que adhieren a la teoría constructivista de la disuasión judicial de las violaciones a los derechos humanos (Sikkink, 2011).

La principal diferencia en cuanto a la contribución individual de los mecanismos de justicia transicional a la protección de los derechos de los derechos humanos, se plantea en torno a las comisiones de verdad. Olsen, Payne y Reiter presentan evidencia de una relación negativa entre el uso de comisiones de verdad y la protección de los derechos de integridad física en las democracias post autoritarias, mientras que Dancy y Thoms (2022) muestran resultados que van en la dirección contraria. Esta diferencia puede ser explicada -en gran medida- por el diseño de las investigaciones, ya que Olsen, Payne y Reiter (2010) analizan el impacto individual y combinado de las comisiones de verdad sobre la protección de los derechos humanos en 74 países que experimentaron transiciones del autoritarismo a la democracia, y el estudio de Dancy y Thoms (2022) realiza un análisis que no se centra únicamente en las transiciones democráticas, ni incorpora otros mecanismos de justicia transicional, como los juicios y las amnistías. Además, el estudio de Olsen, Payne y Reiter utiliza el índice de derechos de integridad física para medir la protección de los derechos humanos, y una variable dicotómica que dan cuenta de la experiencia de los países en el uso de comisiones de verdad. En cambio, Dancy y Thoms utilizan una batería de indicadores que dan cuenta de la calidad de las comisiones de verdad, y miden el nivel de respeto a los derechos humanos a través del indicador de integridad física latente de Schnakenberg y Fariss (2014). Estas diferencias de selección de casos y del uso de indicadores para la covariables de interés, hacen que la evidencia sobre los efectos de las comisiones de verdad sea diferente en ambos estudios.

En cuanto a la combinación de mecanismos de justicia transicional, los estudios muestran diferencias importantes relacionadas con la interacción en el uso de enjuiciamientos, amnistías y comisiones de verdad. Mientras Olsen, Payne y Reiter (2010) presentan evidencia de que el uso combinado de juicios y amnistías, y de juicios, amnistías y comisiones de verdad genera un efecto positivo en la protección de los derechos humanos, porque contribuyen al equilibrio entre los impulsos de rendición de cuentas y la necesidad de estabilidad política presente en las democracias post autoritarias; Dancy y sus colegas (2019) muestran que el uso combinado de juicios y amnistías no genera efectos positivos en la protección de los derechos de integridad física y en las libertades civiles y política de los países en transición. Esta diferencia también puede ser explicada por el diseño de las investigaciones. Olsen, Payne y Reiter (2010) analizan el uso combinado de los tres mecanismos de justicia transicional en los países que transitaron desde el autoritarismo a la democracia, entre 1970 y 2004. En cambio, Dancy y sus colegas (2019) analizan el uso combinado de juicios y amnistías, sin incorporar las comisiones de verdad, en una muestra que incluye dos tipos de casos: transiciones del autoritarismo a la democracia y transiciones por creación de nuevos estados democráticos, entre los años 1970 y 2015. Además, Olsen, Payne y Reiter utilizan indicadores dicotómicos para medir el efecto de las covariables de interés, mientras que Dancy y sus colegas utilizan indicadores números que dan cuenta de la cantidad de juicios, sentencias y amnistías vigentes para cada año de transición. Estas diferencias de selección de casos y de indicadores de medición puede estar relacionadas con las contradicciones observadas en los hallazgos de ambos estudios.

# 3. Teorías e hipótesis de la justicia transicional

Según Dancy y otros (2019), la investigación empírica sobre justicia transicional y prevención de violaciones a los derechos humanos en los regímenes post autoritarios, ha generado tres enfoques teóricos y normativos contrapuestos: el realismo político, el constructivismo y el holismo. En base a cada uno de estos enfoques es posible formular diferentes hipótesis de investigación.

El realismo político es el enfoque promovido por los académicos de la justicia transicional que cuestionan la adopción de políticas de rendición de cuentas en derechos humanos que puedan alterar el equilibrio de "intereses políticos dominantes" en la transición y poner en riesgo la nueva democracia (Vinjamuri & Snyder, 2015). La hipótesis central de estos autores es que los gobiernos post autoritarios que llevan adelante enjuiciamientos penales contra ex violadores de derechos humanos enfrentarán una mayor amenaza de golpes militares y rebeliones violentas, y tendrán más partidos insatisfechos que cuestionen la legitimidad de la nueva democracia (Snyder & Vinjamuri, 2003). Por tanto, bajo este enfoque, las amnistías y la impunidad son vistas como males necesarios; es decir, como medidas responsables que buscan garantizar la estabilidad política y el estado de derecho; mientras que el enjuiciamiento penal, la revisión de antecedentes, y la realización de reformas institucionales a las fuerzas de orden y seguridad son vistas como medidas temerarias, que, al afectar al personal represivo de la autocracia saliente, ponen en riesgo la democracia y la protección de los derechos humanos, sobre todo durante los primeros años de transición, que es el periodo en el que los potenciales saboteadores del proceso aún guardan importantes cuotas de poder institucional.

Según Olsen, Payne y Reiter (2010), el enfoque realista considera que las comisiones de verdad son potencialmente menos desestabilizadoras para las democracias que los enjuiciamientos penales, sobre todo si consideran el otorgamiento de amnistías para los criminales de lesa humanidad que contribuyan con la investigación (Olsen, Payne, & Reiter, 2010, p. 987). En cambio, si las comisiones de verdad publican informes oficiales que recomienden el enjuiciamiento de los violadores de derechos humanos o la implementación de reformas estructurales a las fuerzas de orden y seguridad, generarán mayor riesgo de golpes de estado y de interrupción del proceso de transición democrática.

Desde el enfoque realista se pueden formular las siguientes hipótesis:

* Hipótesis 1 (a): El aumento en el número de enjuiciamientos y condenas por violaciones de derechos humanos estará asociado con la ocurrencia de golpes de estado en los procesos de transición democrática
* Hipótesis 1 (b): El uso de comisiones de verdad que recomienden reformas institucionales o el enjuiciamiento de violadores de derechos humanos estará asociado con la ocurrencia de golpes de estado en los procesos de transición democrática

El segundo enfoque, el enfoque constructivista, reúne a los académicos que argumentan que los cambios legales internacionales y domésticos en materia de rendición de cuentas, y los esfuerzos de los activistas de derechos humanos y de los grupos pro-justicia que presionan a sus gobiernos, crean una demanda de justicia transicional por cambios institucionales y prácticos que ha contribuido significativamente a la no repetición (Dancy et al., 2019; Dancy & Thoms, 2022; Sikkink & Kim, 2013). Estas normas y prácticas han modificado las percepciones de los actores sobre sus intereses y sus estrategias, ya que aumentan los costos penales, simbólicos y políticos asociados a la represión (Sikkink, 2011).

Los académicos del enfoque constructivista, a diferencia de los realistas, han demostrado empíricamente sus afirmaciones, presentando evidencia estadística que sugiere que los enjuiciamientos penales de derechos humanos están asociados con menos violaciones a los derechos de integridad física en el largo plazo (Dancy et al., 2019; Sikkink, 2011; Sikkink & Kim, 2013). Esto se debe a que la socialización normativa y el castigo material por violaciones de derechos humanos genera un efecto disuasorio que contribuye a mejorar la protección de los derechos de integridad física en las democracias post autoritarias (Sikkink, 2011).

Los estudios constructivistas sobre las comisiones de verdad muestran que este mecanismos de justicia transicional también puede contribuir significativamente a la protección de los derechos humanos en las democracias post autoritarias, en la medida que aumenta los costos simbólicos para los agentes represores (H. Kim & Sikkink, 2010). En este sentido, el enfoque constructivista asume que las comisiones de verdad, al igual que los juicios, cumplen una poderosa función comunicativa en las sociedades con democracias post autoritarias, ya que pueden propagar el estigma asociado a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado autoritario. Además, si una comisión de verdad culmina con la publicación de un informe recomendando reformas o enjuiciamientos, entonces podrá reforzar la percepción de que los agentes y las instituciones estatales serán penal y políticamente responsables en el futuro, contribuyendo así a la prevención de la violencia política en las democracias post-autoritarias (Dancy & Thoms, 2022).

Desde el enfoque constructivista es posible formular las siguientes hipótesis:

* Hipótesis 2 (a): El aumento en el número de enjuiciamientos y condenas por violaciones de derechos humanos estarán asociado con un aumento en el nivel de protección de los derechos de integridad física.
* Hipótesis 2 (b): El uso de comisiones de verdad estará asociado con un aumento en el nivel de protección de los derechos de integridad física. Este efecto será mayor si las comisiones de verdad recomiendan reformas institucionales o el enjuiciamiento de violadores de derechos humanos.
* Hipótesis 2 (c): La combinación de enjuiciamientos y comisiones de verdad estará asociada con un aumento en el nivel de protección de los derechos de integridad física.

El enfoque holista es aquel que reúne a los académicos que sostienen que la negociación para la estabilidad política y la disuasión criminal son procesos paralelos y necesarios para garantizar la paz, el estado de derecho y la protección de la integridad física y las libertades civiles de las personas en las transiciones democráticas. La perspectiva holística sostiene que los juicios y las amnistías funcionan en combinación y de manera complementaria para mejorar los derechos humanos y los resultados democráticos (Olsen, Payne, & Reiter, 2010). Olsen, Payne y Reiter (2010, 147–148) desarrollaron este enfoque del "equilibrio de justicia", al afirmar que la combinación de juicios y amnistías es aditiva y que trabajan en conjunto para proporcionar "un término medio entre la rendición de cuentas y el apaciguamiento".

Bajo este enfoque, las comisiones de verdad son vistas como medidas complementarias que contribuyen al equilibrio entre el impulso de rendición de cuentas y los imperativos de estabilidad política que imponen los procesos de transición a través de las amnistías. Son entendidas como medidas complementarias al uso de juicios y amnistías porque, por sí solas, las comisiones de verdad no logran el objetivo de contribuir a la no repetición, ya que no son capaces de dar acceso a la justicia, ni de garantizar la estabilidad política de los procesos de transición. Sin embargo, cuando las comisiones van acompañadas de juicios y amnistías, pueden contribuir significativamente a la rendición de cuentas y la estabilidad política que brindan esos mecanismos a través del otorgamiento de incentivos para la colaboración de agentes del régimen anterior y la publicación de informes con recomendaciones para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos (Olsen, Payne, Reiter, et al., 2010).

Según Zalaquett (1991), la adopción de medidas de justicia transicional bajo el enfoque holista va asociada a un entendimiento sociológico del quehacer político de los gobiernos en una transición democrática, que es la combinación de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad al momento de tomar decisiones (Zalaquett, 1991). En este sentido, los holistas proponen avanzar todo lo que se pueda en verdad, justicia, reparación y no repetición, sin poner en riesgo la democracia y el estado de derecho. Sugieren, por tanto, realizar la mayor cantidad posible de juicios y comisiones de verdad, manteniendo una cantidad mínima de amnistías y de agentes impunes que permita apaciguar a las fuerzas defensoras del ex régimen autocrático durante los primeros años de transición.

Desde el enfoque holista es posible formular las siguientes hipótesis:

* Hipótesis 3 (a): La combinación de juicios y amnistías estará asociada con un aumento en el nivel de respeto de los derechos de integridad física.
* Hipótesis 3 (b): La combinación de juicios, amnistías y comisiones de verdad estará asociada con un aumento en el nivel de respeto de los derechos de integridad física.

# 4. Bibliografía

Armstrong, D. A. (2009). Measuring the democracy–repression nexus. *Electoral Studies*, *28*(3), 403–412. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2009.05.007

Bakiner, O. (2014). Truth Commission Impact: An Assessment of How Commissions Influence Politics and Society. *International Journal of Transitional Justice*, *8*(1), 6–30. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijt025

Bueno De Mesquita, B., Cherif, F. M., Downs, G. W., & Smith, A. (2005). Thinking Inside the Box: A Closer Look at Democracy and Human Rights. *International Studies Quarterly*, *49*(3), 439–458. https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2005.00372.x

Cingranelli, D. L., & Richards, D. L. (2010). The cingranelli and richards (CIRI) human rights data project. *Human Rights Quarterly*, *32*(2), 401–424. https://doi.org/10.1353/hrq.0.0141

Cingranelli, D., Richards, D., & Chad Clay, K. (2014). *The CIRI Human Rights Dataset*. http://www.humanrightsdata.com/p/data-documentation.html

Clark, A. M., & Sikkink, K. (2013). Information Effects and Human Rights Data: Is the Good News about Increased Human Rights Information Bad News for Human Rights Measures? *Human Rights Quarterly*, *35*(3), 539–568. https://doi.org/10.1353/HRQ.2013.0046

Dancy, G., Lessa, F., Marchesi, B., Payne, L. A., Pereira, G., & Sikkink, K. (2014). *The Transitional Justice Research Collaborative Dataset*. https://transitionaljusticedata.com/download

Dancy, G., Marchesi, B. E., Olsen, T. D., Payne, L. A., Reiter, A. G., & Sikkink, K. (2019). Behind Bars and Bargains: New Findings on Transitional Justice in Emerging Democracies. *International Studies Quarterly*, *63*(1), 99–110. https://doi.org/10.1093/isq/sqy053

Dancy, G., & Thoms, O. T. (2022). Do Truth Commissions Really Improve Democracy? *Comparative Political Studies*, *55*(4), 555–587. https://doi.org/10.1177/00104140211024305

Davenport, C. (2007a). *State Repression and the Domestic Democratic Peace*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511510021

Davenport, C. (2007b). State Repression and Political Order. *Annual Review of Political Science*, *10*(1), 1–23. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.101405.143216

Davenport, C., & Armstrong, D. A. (2004). Democracy and the Violation of Human Rights: A Statistical Analysis from 1976 to 1996. *American Journal of Political Science*, *48*(3), 538–554. https://doi.org/10.1111/j.0092-5853.2004.00086.x

*Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*. (1998).

Fariss, C. J. (2014). Respect for Human Rights has Improved Over Time: Modeling the Changing Standard of Accountability. *American Political Science Review*, *108*(2), 297–318. https://doi.org/10.1017/S0003055414000070

Fariss, C. J., & Dancy, G. (2017). Measuring the Impact of Human Rights: Conceptual and Methodological Debates. *Annual Review of Law and Social Science*, *13*(1), 273–294. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110316-113333

Gibney, M., Cornett, L., Reed Wood, A., Haschke, P., Arnon, D., Pisanò, A., Barrett, G., & Park, B. (2020). *Political Terror Scale*.

Haschke, P. (2018). *Human Rights in Democracies* (Routledge).

Hayner, P. (2008). *Verdades innombrables* (Primera ed). Fondo de Cultura Económica.

Keith, L. C. (2012). Political Repression. In *Political Repression*. University of Pennsylvania Press. https://doi.org/10.9783/9780812207033/HTML

Kim, H. J. (2019). Why Do States Adopt Truth Commissions After Transition?\*. *Social Science Quarterly*, *100*(5), ssqu.12646. https://doi.org/10.1111/ssqu.12646

Kim, H., & Sikkink, K. (2010). Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries. *International Studies Quarterly*, *54*(4), 939–963. https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2010.00621.x

Lessa, F., Olsen, T. D., Payne, L. A., Pereira, G., & Reiter, A. G. (2014). Overcoming Impunity: Pathways to Accountability in Latin America. *International Journal of Transitional Justice*, *8*(1), 75–98. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijt031

McGregor, L. (2013). Transitional Justice and the Prevention of Torture. *International Journal of Transitional Justice*, *7*(1), 29–51. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijs038

Mouffe, C. (2014). Democracy, human rights and cosmopolitanism: An agonistic approach. In C. Douzinas & C. Gearty (Eds.), *The Meanings of Rights: The Philosophy and Social Theory of Human Rights* (pp. 181–192). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139227124.014

Olsen, T. D., Payne, L. A., & Reiter, A. G. (2010). The Justice Balance: When Transitional Justice Improves Human Rights and Democracy. *Human Rights Quarterly*, *32*(4), 980–1007. https://doi.org/10.1353/hrq.2010.0021

Olsen, T. D., Payne, L. A., Reiter, A. G., & Wiebelhaus-Brahm, E. (2010). When Truth Commissions Improve Human Rights. *International Journal of Transitional Justice*, *4*(3), 457–476. https://doi.org/10.1093/ijtj/ijq021

Poe, S. C., Tate, C. N., & Keith, L. C. (1999). Repression of the Human Right to Personal Integrity Revisited: A Global Cross-National Study Covering the Years 1976–1993. *International Studies Quarterly*, *43*(2), 291–313. https://doi.org/10.1111/0020-8833.00121

Richards, D. L., Webb, A., & Clay, K. C. (2015). Respect for Physical-Integrity Rights in the Twenty-First Century: Evaluating Poe and Tate’s Model 20 Years Later. *Journal of Human Rights*, *14*(3), 291–311. https://doi.org/10.1080/14754835.2015.1061423

Rivas, J. (2016). Official Victims’ Registries: A Tool for the Recognition of Human Rights Violations. *Journal of Human Rights Practice*, *8*(1), 116–127. https://doi.org/10.1093/jhuman/huw003

Rivera Celestino, M. (2010). Estudios sobre represión estatal en regímenes democráticos. *Política y Gobierno*, *XVII*(1), 59–95. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60327298003

Rivera, M. (2012). *¿Por qué reprimen las democracias?: Los determinantes de la violencia estatal en América Latina*. FLACSO-México. https://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/libros\_oa/por-que-reprimen\_0.pdf

Sikkink, K. (2011). El efecto disuasivo de los juicios por violaciones de derechos humanos. *Anuario de Derechos Humanos*, *7*, 41–61. https://doi.org/10.5354/0718-2279.2011.16995

Sikkink, K., & Kim, H. (2013). The Justice Cascade: The Origins and Effectiveness of Prosecutions of Human Rights Violations. *Annual Review of Law and Social Science*, *9*(1), 269–285. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102612-133956

Snyder, J., & Vinjamuri, L. (2003). Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International. *International Security*, *28*(3), 5–44. http://www.jstor.org/stable/4137476

Teitel, R. G. (2003). Transitional Justice Genealogy. *Harvard Human Rights Journal*, *16*, 69–94.

Vinjamuri, L., & Snyder, J. (2015). Law and Politics in Transitional Justice. *Annual Review of Political Science*, *18*, 303–327. https://doi.org/10.1146/ANNUREV-POLISCI-122013-110512

Wood, R. M., & Gibney, M. (2010). The Political Terror: A Re-introduction and Comparison to CIRI. *Human Rights Quarterly*, *32*(2), 367–400.

Zalaquett, J. (1991). Balancing Ethical Imperatives and Political Constraints: The Dilemma of New Democracies Confronting Past Human Rights Violations. *Hastings Law Journal*, *43*. https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/hastlj43&id=1461&div=&collection=